

Señores

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA – CAQUETÁ

E.

S.

D.

RADICACIÓN: 18001-33-33-001-2022-00404-00

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA

DEMANDADO: SOCIEDAD UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES DE MÉRITO Y SOLICITUDES PROBATORIAS

LEIDY KATHERINE REMOLINA PINTO, mayor de edad e identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.100.222.045 de Mogotes y Tarjeta Profesional 273.049 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderada judicial de las sociedades i) **UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.S.**, identificada con NIT 900655891-1, ii) **TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.**, identificada con NIT. 890.903.035-2, iii) **LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.**, identificada con NIT. 825.000.164-2; iv) el señor **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO** identificado con la C.C. N° 6.801.919 y, v) el **CONSORCIO DEUS 2018**, demandados dentro del medio de control del asunto, de conformidad con los respectivos poderes que adjunto y que acepto expresamente, dentro del término de ley, acudo a su Despacho con el fin de **CONTESTAR LA DEMANDA, FORMULAR EXCEPCIONES DE MÉRITO Y ELEVAR SOLICITUDES PROBATORIAS** en el medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** que ha incoado **YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA**, en contra de mis representados, para lo cual procedo en los siguientes términos:

1. OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta que el auto admisorio de la demanda fue remitido mediante comunicación electrónica de fecha **8 de junio de 2023**, de conformidad con el artículo 199° de la Ley 1437 de 2011, se entiende realizada el día 13 de junio de 2023. Por lo anterior, el término de 30 días concedido por el Despacho para contestar la demanda transcurre entre el 14 de junio y el **28 de julio de 2023**, lapso dentro del cual se radica el presente escrito.

2. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Señor Juez, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, además, a que en contra de mis representados se efectúe cualquier clase de declaración y/o condena que afecte, directa o indirectamente sus intereses, por considerar que aquellas carecen de fundamento jurídico, fáctico y probatorio, lo que impide su prosperidad, como quedará demostrado en el curso del proceso. Así las cosas, procedemos a manifestarnos frente a cada una de las referidas pretensiones, respetando el orden en que fueron planteadas, así:

-Frente a la pretensión PRIMERA., nos oponemos a la prosperidad de esta pretensión ya que, como se demostrará en el proceso, no existe obligación de indemnización atribuible a mis representados ya que los supuestos daños causados se dieron con ocasión de hechos atribuibles a terceros y que escapan por completo del accionar de mis representados.

-Frente a la pretensión SEGUNDA, nos oponemos a la prosperidad de esta pretensión ya que, como se probará en el proceso, no existe el deber de indemnizar los perjuicios inmateriales que alega la demandante, pues los mismos no cuentan con ningún sustento probatorio que acredite su real existencia. Además, los supuestos daños causados se dieron con ocasión de hechos atribuibles a terceros y que escapan por completo del accionar de mis representados, lo que permite establecer no existe nexo causal alguno que permita imputar los supuestos perjuicios sufridos por la demandante a los mismos.

- Frente a la pretensión TERCERA, nos oponemos a la prosperidad de esta pretensión ya que, como se probará en el proceso, no existe el deber de indemnizar los perjuicios materiales que alega la demandante, pues los mismos no cuentan con ningún sustento

probatorio que acredite su real existencia. Además, los supuestos daños causados se dieron con ocasión de hechos atribuibles a terceros y que escapan por completo del accionar de mis representados, lo que permite establecer no existe nexo causal alguno que permita imputar los supuestos perjuicios sufridos por la demandante a los mismos.

-Frente a la pretensión 4.4., nos oponemos a la prosperidad de esta pretensión, ya que, al no existir obligación indemnizatoria de mis representados, no hay lugar al pago solicitado en esta pretensión.

-Frente a la pretensión 4.5., nos oponemos a la prosperidad de esta pretensión, ya que, al no existir obligación indemnizatoria de mis representados, no hay lugar a la condena en costas solicitada.

3. EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Al hecho 1.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 2.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 3.: ES CIERTO.

Al hecho 4.: ES CIERTO.

Al hecho 5.: ES CIERTO.

Al hecho 6.: ES CIERTO. Sin embargo, se aclara que la terminación del contrato se dio el 28 de diciembre de 2022.

Al hecho 7.: ES CIERTO. Dicha póliza se tomó en virtud de las obligaciones adquiridas por el Consorcio en el contrato principal.

Al hecho 8.: ES CIERTO. Con la empresa ASOTRANCONSMO se celebró contrato que tenía como objeto prestar el servicio de transporte de material de excavación a todo costo, esto es, bajo su responsabilidad y riesgo.

Al hecho 9.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 10.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 11.: NO ES CIERTO. El Consorcio no tuvo ninguna relación contractual con la aquí demandante y, por ende, no recibió la máquina excavadora relacionada en este hecho, por lo que TAMPOCO ES CIERTO que haya quedado bajo su responsabilidad y control ya que el Consorcio DEUS contrató el alquiler de maquinaria con la empresa ASOTRANCONSMO.

Al hecho 12.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso ya que, como la misma demandante lo indicó en el hecho 8° de la demanda, el Consorcio DEUS contrató el alquiler de maquinaria con la empresa ASOTRANCONSMO y no existió ningún vínculo contractual con la demandante.

Al hecho 13.: NO ES CIERTO. Si bien se expedían una serie de recibos de reporte de horas trabajadas, los mismos fueron expedidos por el Consorcio a nombre del señor Orlando Gasca, representante legal de la empresa ASOTRANCONSMO y en nunca en favor de la aquí demandante ya que, como la misma demandante lo indicó en el hecho 8° de la demanda, el Consorcio DEUS contrató el alquiler de maquinaria con la empresa ASOTRANCONSMO y no existió ningún vínculo contractual con la demandante.

Al hecho 14.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso. Sin embargo, nótese cómo la demandante confiesa en este hecho que quien le pagó por sus servicios fue la empresa ASOTRANCONSMO, lo que ratifica que no tenía ninguna relación contractual con mis representados.

Al hecho 15.: ES CIERTO. En virtud de los hostigamientos y amenazas sufridas en desarrollo del proyecto, mis representados, de manera diligente, pusieron en conocimiento la delicada situación.

Al hecho 16.: ES CIERTO.

Al hecho 17.: ES CIERTO.

Al hecho 18.: ES CIERTO.

Al hecho 19.: ES CIERTO. En virtud de los hostigamientos y amenazas sufridas en desarrollo del proyecto, mis representados, de manera diligente, pusieron en conocimiento la delicada situación.

Al hecho 20.: ES CIERTO. Sin embargo, nótese cómo la demandante atribuye en este hecho la causación del daño al accionar directo de las “*disidencias del grupo armado organizado al margen de la Ley FARC*”, lo que ratifica que no existe nexo de causalidad entre el daño causado y el actuar de mis representados.

Al hecho 21.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 22.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 23.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso. Sin embargo, nótese cómo la demandante atribuye en este hecho la causación del daño al accionar directo de las “*disidencias de las FARC*”, lo que ratifica que no existe nexo de causalidad entre el daño causado y el actuar de mis representados.

Al hecho 24.: NO ES UN HECHO. Se trata de una apreciación subjetiva y jurídica del apoderado de la demandante que, además, carece del más elemental sustento frente a la imputación que pretender hacer a mis representados.

Al hecho 25.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 26.: NO LE CONSTA a mis representados por resultar ser ese un hecho ajeno a la misma. Nos estaremos a lo que resulte probado en el proceso.

Al hecho 27.: NO ES UN HECHO. Se trata de una apreciación subjetiva y jurídica del apoderado de la demandante que, además carece del más elemental sustento frente a la imputación que pretender hacer a mis representados.

Al hecho 28.: NO ES UN HECHO. Se trata de una apreciación subjetiva y jurídica del apoderado de la demandante que, además carece del más elemental sustento frente a la imputación de responsabilidad que pretender hacer a mis representados.

No obstante, se aclara que de la misma confesión que hace la demandante en su escrito de demanda, se advierte que: i) no existió vínculo contractual alguno con ninguno de mis representados, ii) que su relación contractual se dio con la empresa ASOTRANCONSMO y, iii) que el hecho dañino se lo atribuye de manera exclusiva y directa al actuar de un grupo al

margen de la ley, por lo que el relato y el vano intento de imputación de responsabilidad a mis representados resulta confuso y carente de todo sustento.

En relación con la atribución de responsabilidad que hace a los demás demandados se insiste que NO SE TRATA DE UN HECHO y así deberá considerarlo el Despacho.

Al hecho 29.: NO ES UN HECHO. Se trata de una apreciación subjetiva y jurídica del apoderado de la demandante que, además carece del más elemental sustento frente a la imputación de responsabilidad que pretender hacer a mis representados.

Al hecho 30.: NO ES UN HECHO. Se trata de una apreciación subjetiva y jurídica del apoderado de la demandante que, además carece del más elemental sustento frente a la imputación de responsabilidad que pretender hacer a mis representados.

Al hecho 31.: NO ES UN HECHO. Se trata de una apreciación subjetiva y jurídica del apoderado de la demandante que, además carece del más elemental sustento frente a la imputación de responsabilidad que pretender hacer a mis representados.

Al hecho 32.: ES CIERTO.

4. EXCEPCIONES DE MÉRITO

Frente a las pretensiones de la demanda formulo las siguientes excepciones:

4.1. CAUSA EXTRAÑA: HECHO EXCLUSIVO DE TERCERO

Las consecuencias nocivas descritas en la demanda ocurrieron presumiblemente como consecuencia de un ataque subversivo o terrorista por parte de un tercero perteneciente a grupos al margen de la ley.

En efecto, el hecho dañino no tuvo lugar como consecuencia de una acción o una omisión de mis representados, pues no tuvieron ninguna influencia causal en los hechos desafortunados de ese día.

Justamente el hecho fue perpetrado de manera única y exclusiva por un tercero, el cual fue imprevisible e irresistible, lo que impide la atribución e imputación del daño a mis representados.

Ciertamente como lo señala la doctrina y en especial el profesor Juan Carlos Henao¹ uno de los elementos de la responsabilidad es la imputación, la cual se estructura luego de haberse descubierto el nexo causal y se realiza en principio, respecto de la persona que ha resultado causante del hecho generador del daño de acuerdo con el juicio de causalidad efectuado, y se define como “la atribución jurídica de un daño a una o a varias personas que en principio tienen la obligación de responder”.

Efectivamente, para poder imputar o atribuir el daño debe probarse uno de dos presupuestos a saber:

1. Que el daño haya sido causado directamente por el demandado, esto es, que la causa directa del daño haya sido el comportamiento activo del agente.
2. Que a pesar de que el daño no haya sido causado directamente por el demandado, éste se encuentre en la obligación legal de responder por el hecho de otro.

En el presente caso, ninguno de los dos presupuestos de la imputación se encuentra presente, ni mis representados causaron directamente o indirectamente el hecho dañino, ni se encuentran en la obligación legal de responder por el hecho de terroristas, subversivos o hechos violentos de terceros al margen de la ley.

¹ Henao, Juan Carlos, “El Daño” Ed. Universidad Externado de Colombia. 2007.

En efecto, la afectación relatada en la demanda, NO se produjo como consecuencia de una acción o una omisión de mis representados, pues el Estado a través del ejército nacional está en la obligación de garantizar la libre circulación y seguridad en todo el territorio colombiano, y fue en ejercicio de esa garantía constitucional que se dio la ejecución de las obras, máxime cuando hechos como el relatados en la demandada resultan completamente imprevisibles e irresistibles para cualquier ciudadano.

De otra parte, ninguna entidad del estado y mucho menos un particular está en la obligación legal de responder por hechos violentos de terceros o de grupos subversivos o al margen de la ley, pues tal planteamiento implicaría la afirmación de que dichos terceros o grupos hacen parte de la organización misma del Estado o dependen del mismo, pues esos son los eventos en los que puede pensarse en la responsabilidad indirecta o por el hecho de otro.

Por lo expuesto hasta ahora, en el presente caso NO se configuran los presupuestos para la atribución o la imputación del daño a mis representados, pues como bien lo señala Henao²:

*“(...) En ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto **el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad.***

*En efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido el daño. **Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe, pero no se puede atribuir al demandado; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo_...**”.* (Resaltado fuera de texto).

De otra parte, siguiendo con las causales eximentes de responsabilidad, se tiene establecido por la doctrina y la jurisprudencia lo siguiente:

*“Por causal exonerativa de responsabilidad se entiende aquella causal que **impide imputar determinado daño a una persona, haciendo improcedente, en consecuencia, la declaratoria de responsabilidad.** En este sentido, las causales exonerativas (causa extraña) **impiden la imputación**, en ocasiones porque es inexistente el nexo de causalidad (por **ejemplo en el hecho del tercero como causa exclusiva**) (...).”³*

Asimismo, en relación con el **hecho de tercero** precisa la doctrina:

*“Esta causal de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, **el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad** jurídicamente solo es tercero alguien extraño, **por quien no se debe responder; es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria.**”⁴*

*“El supuesto más común del hecho del tercero es aquel en el cual la **participación del alguien extraño al demandante y al demandado fue el verdadero causante del daño** y en este sentido, **se configura una inexistencia del nexo causal.**”⁵*

Conforme a lo expuesto, en el presente caso la imputación o atribución del daño a mis representados es imposible por **tres razones jurídicas:**

1. **Entre mis mandantes y la aquí actora no existió ningún vínculo contractual.**
2. **El daño no fue causado por mis representados.** Esto es, la causa directa del daño no fue su comportamiento activo ni omisivo.

² Ibídem 8

³ Patiño, Héctor “Las Causales Exonerativas De Responsabilidad Extracontractual” Revista de Derecho Privado N° 20 enero – junio de 2011.

⁴ Ibídem 10

⁵ Ibídem

3. **El hecho fue causado de manera exclusiva por un tercero, cuya conducta, además de imprevisible era irresistible.** Ciertamente, y como aparece demostrado en las pruebas documentales que se aportan con la presente contestación, mis representados no participaron, ni concurrieron de ninguna manera a la causación del daño.

En efecto, como lo reconoce el propio demandante en el Libelo introductorio y que se apoya en la documental allegada con ese escrito, el hecho causante del daño es atribuible a un grupo armado ilegal que se encontraba en la zona y frente a dicha situación entonces existe una **IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR EL DAÑO POR INEXISTENCIA DE LOS REQUISITOS PARA SU IMPUTACIÓN**

Como fue explicado en líneas anteriores, la imputación como elemento del juicio de responsabilidad, implica la atribución jurídica de un daño al sujeto que, o causó directamente el hecho dañino, o que en virtud de la ley está obligado a responder por el hecho de otro o el hecho ajeno.

Igualmente se precisó que, mis representados no causaron ni participaron de manera alguna en la causación del daño, lo anterior se afirma por las siguientes razones:

1. La seguridad y la circulación por las vías del país debe ser garantizada por la fuerza pública, por expreso mandato constitucional.
2. No existe posibilidad de que mis representados se anticiparan o por lo menos pudieran resistir un ataque como el relatado en la demanda.
3. Los ataques violentos de terceros, ataques terroristas o de grupos al margen de la ley, son por regla general **imprevisibles**. En efecto, por más que en una zona específica la situación del orden público sea de riesgo latente, es imposible, incluso para la Fuerza Pública, prever un acto violento de un tercero.
4. Si se considerase que, en las zonas de orden público difícil, no deben realizarse proyectos u obras en beneficio de la comunidad o de la población con fundamento en el riesgo, sería tanto como ordenar el abandono y el aislamiento por parte del estado de esa población.
5. Para la señora **YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA** la situación de orden público de la zona no era desconocida, sin embargo, y para morigerar las consecuencias de un evento dañino que afectara los vehículos utilizados para la ejecución de los trabajos, se le solicitó a **ASOTRANCONSMO** que la maquinaria contara con la constitución de una póliza de seguro, sin embargo, el contratista obvió tal necesidad y con ello asumió bajo su propio patrimonio cualquier afrenta a sus bienes o a los que tenía bajo su custodia, por lo que resulta apenas ilógico que mediante la demanda hoy en trámite se reclame a mis representados por el pago de una indemnización que pudo ser asumida con base en el contrato de seguro antes mencionado.
6. Los ataques violentos de terceros, ataques terroristas o de grupos al margen de la ley son irresistibles. En efecto, la posibilidad de repeler un ataque terrorista o resistirse a sus efectos, es imposible para los particulares y para cualquier otra persona que no tenga el monopolio del uso de la fuerza y las armas.⁶

4.2. IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR EL DAÑO POR INEXISTENCIA DE LOS REQUISITOS PARA SU IMPUTACIÓN

Como fue explicado en líneas anteriores, la imputación como elemento del juicio de responsabilidad, implica la atribución jurídica de un daño al sujeto que, o causó

⁶ Sentencia C-251 de 2002.

directamente el hecho dañino, o que en virtud de la ley está obligado a responder por el hecho de otro o el hecho ajeno.

Igualmente se precisó que, mis representados no causó ni participó de manera alguna en la causación del daño, lo anterior se afirma por las siguientes razones:

1. La decisión de ingresar a las áreas de trabajo no es una decisión inconsulta o arbitraria.
2. El CONSORCIO DEUS únicamente daba la orden de trabajo, una vez ha podido establecer que la zona es segura mediante la información que le suministra la Fuerza Pública.
3. Como prevención ante el riesgo de un ataque o incursión terrorista o de grupos violentos al margen de la ley, el Ejército Nacional brinda su acompañamiento en virtud de los acuerdos previos acordados con el Consorcio.
4. Los ataques violentos de terceros, ataques terroristas o de grupos al margen de la ley, son por regla general **imprevisibles**. En efecto, por más que en una zona específica la situación del orden público sea de riesgo latente, es imposible, incluso para la Fuerza Pública, prever un acto violento de un tercero, quien oculto y aprovechando la oscuridad de la noche comete un acto ilícito.
5. Si se considerase que en las zonas de orden público difícil, no deben realizarse proyectos u obras en beneficio de la comunidad o de la población con fundamento en el riesgo, sería tanto como ordenar el abandono y el aislamiento por parte del estado de esa población.
6. Los ataques violentos de terceros, ataques terroristas o de grupos al margen de la ley son **irresistibles. En efecto, la posibilidad de repeler un ataque terrorista o resistirse a sus efectos, es imposible para los particulares y para cualquier otra persona que no tenga el monopolio del uso de la fuerza y las armas.**⁷

4.3. LA RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, HONRA Y BIENES DE LOS CIUDADANOS ES DE LA FUERZA PÚBLICA

Desde la constitución de 1886 se ha considerado como parte del contenido obligacional a cargo del estado “*la protección de la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos*” así como “*defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo*”⁸.

Con fundamento en dicho contenido obligacional, se ha considerado de manera uniforme y unánime por la jurisprudencia de la Corte Constitucional⁹ y del Consejo de Estado que, frente a los daños ocasionados a los ciudadanos como consecuencia de actos violentos de terceros o actos terroristas, existe una responsabilidad a cargo del estado por la acción o la omisión en la garantía a la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

⁷ Sentencia C-251 de 2002.

⁸ Artículo 19 constitución de 1886 “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos, en el mismo sentido ver artículo 2 Constitución Política de 1991.

⁹ Una de las finalidades básicas de las autoridades colombianas es la defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, no sólo porque así lo establece el artículo 2º de la Carta, sino además porque esos elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades. La Constitución busca el fortalecimiento de las instituciones, para que éstas puedan cumplir efectivamente su misión constitucional de asegurar la convivencia pacífica perturbada por grupos armados que actúan al margen de la ley y atentan contra la vida, la libertad y los demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia. Por ello esta Corte señaló que el Estado tiene el deber de “mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico - político estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad”, puesto que el derecho “sólo puede asegurar al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia a condición de reprimir, incluso con la fuerza, aquellas actividades violentas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad”. Sentencia C-251 de 2002.

En efecto, en numerosos fallos del Consejo de Estado, se ha precisado que **“los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas”**¹⁰

Justamente, se considera que, en los eventos en los no existe enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos armados al margen de la ley, pero se encuentran bienes o agentes del estado considerados objetivo militar¹¹ y se causa un daño a un particular, **se configura la responsabilidad del Estado.**¹²

Ahora, vale la pena precisar que, como el mismo demandante lo relata en su escrito de demanda, el CONSORCIO DEUS en varias ocasiones reportó e informó a la Gobernación y a la interventoría del proyecto la situación de inseguridad y las amenazas que conoció en ejecución del contrato.

Así las cosas, mis representados NO son responsables por el aseguramiento del área de trabajo, por el desplazamiento de la maquinaria necesaria para los trabajos contratados, ni por la coordinación con la Fuerza Pública para ello, ni tiene la competencia ni la facultad constitucional, legal o contractual de contar con algún dispositivo de seguridad que mitigue, impida o repela un atentado terrorista o un acto violento de terceros, pues de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico el uso de fuerza y del armamento son privativas de las fuerzas públicas.

Al respecto, ha sido enfática la Corte Constitucional en señalar que **“La Fuerza Pública es la garante del orden público, y no puede desprenderse de esa función y trasladarla a los particulares. Las personas tienen ciertos deberes de colaboración en esta materia, que han sido previstos por la propia Constitución, pero eso no significa que la ley pueda convertirlos en garantes de la seguridad y la defensa, pues esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la Fuerza Pública”**.

Continúa precisando la Corte Constitucional, que **de ninguna manera un particular puede tener a su cargo la protección de las personas o ser garante de su seguridad**, como tampoco **“puede trasladarse a los propios ciudadanos esa función, sin desnaturalizar la estructura constitucional del Estado colombiano”** en los siguientes términos se pronuncia la Corte:

“En cumplimiento de su función primigenia de proteger a la población, la Fuerza Pública debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al Estado el monopolio del uso legítimo de las armas. Y en este campo, el Presidente tiene una responsabilidad esencial, pues no sólo le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, sino que además, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es, dirige la fuerza pública y conduce las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.

(...) Si el Estado está al servicio de la comunidad y de las personas, entonces corresponde obviamente a las autoridades del Estado proteger y ser garantes de la seguridad de las personas, y no a las personas proteger y ser garantes de la seguridad del Estado. (Resaltado fuera de texto)

La posibilidad de imponer deberes en materia de orden público y defensa se encuentra además delimitada por la propia Carta, que atribuye ese papel

¹⁰ Sentencia del Consejo de Estado del 28 de junio de 2008. Exp. 16630. Al respecto también pueden consultarse las sentencias del 23 de octubre de 2003 Exp. 14211 y 21 de julio de 2007 Exp. 25627.

¹¹ Son considerados objetivo militar, en lo que respecta a bienes, según el protocolo I al Convenio de Ginebra de 1949 *“aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización, ofrezca en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida”*.

¹² M'Causland, María Cecilia “Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros”. La Filosofía de la Responsabilidad Civil, Editado por Carlos Bernal Pulido y otro. Ed. Universidad Externado de Colombia. 2013.

*fundamentalmente a la Fuerza Pública. Así, a las Fuerzas Militares corresponde la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, mientras que la Policía debe mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. **Esto significa que es la Fuerza Pública la garante de la convivencia ciudadana, y no puede trasladarse a los propios ciudadanos esa función, sin desnaturalizar la estructura constitucional del Estado colombiano.*** (Resaltado fuera de texto)

Las estrategias de seguridad y defensa no pueden imponer deberes tales a la población civil, que terminen involucrándola en el conflicto armado, ya que no sólo se estaría afectando el principio de distinción derivado del derecho internacional humanitario, sino que además se estaría desconociendo el mandato constitucional, según el cual, las tareas de protección de la soberanía y el orden público corresponden a la Fuerza Pública, y no a los particulares. (Resaltado fuera de texto)

***En situaciones de conflicto armado, el deber constitucional de los particulares de apoyar a las autoridades se encuentra limitado por el principio de distinción, por lo cual no puede el Estado involucrar activamente a la población civil en el conflicto armado.** Y es que la interpretación opuesta, a saber que el deber de apoyo a las autoridades permitiría involucrar a la población no combatiente en las hostilidades, resulta inadmisibile pues desconoce la norma básica del derecho humanitario, que es la exclusión de la población civil del conflicto armado, a fin de asegurarle una adecuada protección. Esa interpretación vulneraría entonces el perentorio mandato del artículo 214 de la Carta, según el cual, en todo caso deben ser respetadas las reglas del derecho internacional humanitario.¹³*

De conformidad con lo expuesto, el régimen de responsabilidad que procede en presente caso, atendiendo a que el hecho ocurrido corresponde al actuar ilícito y violento de un tercero perteneciente a grupos al margen de la ley, y cuyo actuar está motivado por la intención de generar pánico, dolor y zozobra en la población, además de atacar contra bienes del estado considerados objetivo militar como es el caso de la infraestructura vial de nación y las actividades productivas que en ellas se desarrollan, es entonces, un típico evento de responsabilidad administrativa o estatal, en la que de ninguna manera puede involucrarse o responsabilizarse a los particulares, como es el caso de mis representados.

4.4. FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA Y PASIVA:

Teniendo en cuenta que para estructurar su demanda el actor presupone la existencia de un contrato con mis representados y el mismo no existe, el libelo introductorio adolece de unos de sus requisitos indispensables para darle trámite pues no existiría razón jurídica válida para exigir algún tipo de indemnización con base en los hechos que se ha esmerado por enrostrarle.

Dicha situación es mas flagrante en el hecho de mis mandantes no fueron causantes del siniestro que da lugar a la demanda y así se acepta en todos y cada uno de los relatos que efectúa el extremo demandante, donde da cuenta que el causante único del daño es un tercero presuntamente adscrito a grupos armados al margen de la ley, lo que también devendría sin mayores elucubraciones en una falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser mi agenciada el verdadero llamado a absolver sus pretensiones.

4.5. NO CONFIGURACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO SUFRIDO Y LA CONDUCTA QUE SE PRETENDE ATRIBUIR A MIS REPRESENTADOS

Enseña la legislación civil y comercial colombiana que en materia de responsabilidad civil es indispensable la configuración de los tres (3) presupuestos tradicionales de la

¹³ Sentencia C- 251 de 2002.

responsabilidad, es decir: (i) la culpa, entendida ésta como el error en el obrar por falta de la diligencia y cuidado de “*buen hombre de negocios*”; (ii) el nexo de causalidad, el cual resulta ser el vínculo necesario entre el obrar negligente y el daño ocasionado, cuya relación debe ser de *causa y efecto*, y (iii) el daño, que cuando resulta material, se entiende como el detrimento en el patrimonio de una persona o el perjuicio sufrido, ya sea dentro de la modalidad de daño emergente o el lucro cesante.

Así, en caso de que se omita cualquiera de los elementos de la esencia de la responsabilidad civil, implica, como consecuencia jurídica, la inexistencia de responsabilidad y, consecuentemente, la inexistencia de la obligación de indemnizar.

En el asunto *sub júdice*, NO se configuran los elementos esenciales de la responsabilidad civil, habida cuenta que la demandante pretenden el reconocimiento de daños y perjuicios inexistentes, los cuales erróneamente supone sin que realmente se hayan generado, situación que se infiere de la carencia de pruebas al respecto; por otra parte, tampoco existe vínculo de causalidad entre los hechos descritos por la demandante y los supuestos daños sufridos, tal y como se expone a continuación:

- **INEXISTENCIA DEL DAÑO**

Dentro del régimen de responsabilidad civil vigente en nuestro país, es requisito *sine qua non* la existencia del daño o perjuicio, concebido este como todo detrimento, menoscabo o perjuicio que, como consecuencia de un acontecimiento determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, corporales o patrimoniales.¹⁴

De lo anterior, se afirma que la existencia del daño es de tal trascendencia, que su ausencia implica la imposibilidad de pretender la declaratoria de responsabilidad en cabeza de un tercero.

Dicha regla se encuentra ratificada mediante múltiples pronunciamientos de la jurisprudencia colombiana, la cual enuncia que el daño constituye un requisito de la obligación de indemnizar, ya que al no demostrarse este, no es posible estructurar un juicio de responsabilidad. Al respecto ha afirmado la Corte Suprema de Justicia:

“[...] pertinente memorar que el daño es uno de los presupuestos estructurales imprescindibles de la responsabilidad, sin cuya existencia y plena probanza en el proceso es evanescente e ilusoria, a punto de resultar innecesaria la verificación y análisis de sus restantes elementos, desde luego que, ante su ausencia no surge ninguna obligación indemnizatoria.”¹⁵

Así las cosas, para que surja la obligación indemnizatoria en cabeza del demandado, será necesario acreditar la existencia del perjuicio reclamado, requisito que en el caso *in examine* brilla por su ausencia.

-**INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA QUE SE PRETENDE IMPUTAR A MIS REPRESENTADOS Y EL SUPUESTO DAÑO SUFRIDO POR EL DEMANDANTE.**

El nexo causal constituye uno de los elementos imprescindibles del juicio de responsabilidad civil ya que este resulta ser el enlace entre el hecho generador del daño y el daño causado. Este vínculo causal es indispensable porque la conducta del demandado debe ser la causa directa, necesaria y determinante del daño.

Por lo anterior, se requiere para que haya una efectiva imputación del daño, que el mismo pueda ser atribuido de manera directa o indirecta – para el caso de responsabilidad por el hecho de terceros – a quien con su conducta ocasionó el mismo

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

¹⁴ Rodrigo Escobar Gil. Responsabilidad Contractual de la administración pública. Bogotá. Ed. Temis, 1989. P. 165

¹⁵ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 4 de abril de 2001. Exp. 5502 Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

*“Basta constatar que el nexo causal no es un objeto perceptible por los órganos de los sentidos para admitir de manera concluyente que no es un elemento susceptible de demostración por pruebas directas sino por inferencias lógicas que el juez realiza a partir de un marco de sentido jurídico que le permite comprender la evidencia probatoria para hacer juicios de atribución. **La falta de reconocimiento de tal situación conduce a dejar de elaborar los enunciados probatorios con base en un argumentum ad ignorantiam (ausencia de prueba como prueba de ausencia), pasando por alto que ‘la causalidad’ que interesa al derecho no es un objeto que pueda hallarse en la naturaleza sino una hipótesis que el juez debe construir.**”¹⁶ (Énfasis propio)*

De lo anterior, se desprende que, entre el supuesto daño sufrido, esto es, la incineración de la máquina retroexcavadora de propiedad de la demandante, no encuentra relación suficiente y comprobada respecto del comportamiento de mis representados.

Se deriva de lo anterior que, concluir de manera prematura que los supuestos daños sufridos se dieron como consecuencia de acciones u omisiones por parte de mis representados, conduce de manera inexorable a declarar probado un nexo causal que, en primer lugar, no admite presunciones y, en segundo lugar, carece de todo fundamento probatorio en este proceso.

De esta manera, se evidencia la inexistencia de vínculo de causalidad entre los hechos alegados por la demandante, al resultar manifiesto que no existe prueba alguna del nexo causal entre el daño ocurrido y el actuar de el Consorcio y las sociedades que represento.

4.6. AUSENCIA DE PRUEBA E INDEBIDA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS PRETENDIDOS

En punto de responsabilidad, la jurisprudencia nacional de tiempo atrás ha señalado que para que le sea imputable al causante del daño, la obligación de reparar es necesario e indispensable que el afectado acredite tanto la existencia del perjuicio, como la cuantificación del mismo; acreditación que en el caso que nos ocupa, brilla por su ausencia.

Como se ha señalado en este escrito, para que surja la obligación indemnizatoria en cabeza del demandado, será necesario acreditar la existencia del perjuicio reclamado, requisito que en el caso *in examine* brilla por su ausencia.

Derivado de lo anterior, al no existir prueba del perjuicio cuya indemnización se pretende, no es comprensible la base utilizada para proceder con el cálculo y la tasación de los mismos.

Así las cosas, resulta jurídicamente inviable que aun cuando no se allega prueba alguna relacionada con la demostración del daño emergente sufrido, solicite un reconocimiento de perjuicios a su favor.

Se destaca además, que no existe obligación de indemnización atribuible a mis representados ya que los supuestos daños causados carecen del más elemental sustento probatorio, por lo que falta al elemento esencial de la responsabilidad para que el daño pueda ser indemnizado, esto es, que el daño sea cierto además que, se insiste, no existe nexo de causalidad que permita imputar la causación del hecho dañino a mis representados.

4.7. BUENA FE

La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta” (*vir bonus*). Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con

¹⁶ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 12 de enero de 2018. Radicación N° 11001-31-03-027-2010-00578-01. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez

trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”¹⁷.

Dentro del caso que nos ocupa, frente al actuar del CONSORCIO DEUS y sus conformantes, se logra determinar que sus actuaciones siempre estuvieron fundadas en la buena fe, pues dio cumplimiento estricto a sus obligaciones, tan es así que estuvieron siempre diligentes a informar a las autoridades correspondientes la existencia de anomalías y amenazas que afectaban la ejecución del proyecto.

Por lo anterior, estando reunidos los presupuestos que advierte tanto la jurisprudencia como la ley para la aplicación del principio de buena fe, solicitados al señor Juez declarar probada esta excepción.

4.8. EXCEPCIÓN GENÉRICA.

Consistente en que todo hecho que resulte probado en el curso del proceso y que constituya causal eximente de responsabilidad del **CONSORCIO DEUS y sus integrantes** deberá así ser declarado, de conformidad con la estipulación contenida en el Artículo 282 del C.G.P.

5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Encuentran respaldo mis actuaciones jurídicas, entre otros en el artículo 1757 y 2357 del Código Civil, artículo 70 de la ley Estatutaria de la Administración de Justicia artículo 167 del Código General del Proceso, además de todas aquellas normas que resulten aplicables.

6. SOLICITUDES PROBATORIAS

6.1. DOCUMENTALES:

6.1.1. Contrato de fecha 10 de enero de 2020 celebrado entre ASOTRANCONSMO y el Consorcio DEUS 2018.

6.1.2. Orden de servicio No. 255 ORS-041 emitida por el Consorcio DEUS 2018 en favor de ASOTRANCONSMO de fecha 16 de julio de 2020.

6.1.3. Oficio de fecha 19 de febrero de 2020 dirigido a la Gobernación de Caquetá.

6.1.4. Oficio de fecha 11 de agosto de 2020 dirigido a la Interventoría del Proyecto, Consorcio ECA 2017.

6.1.5. Contrato 720 de 2017 celebrado entre el Consorcio ECA 2017 y el Departamento de Caquetá.

6.1.6. Contrato 724 de 2017 celebrado entre el Consorcio DEUS 2018 y el Departamento de Caquetá.

6.1.7. Acta de reunión de fecha 14 de septiembre de 2022.

6.1.8. Acta de terminación del contrato de obra No. 724/2017.

6.2. INTERROGATORIO DE PARTE:

De conformidad con el artículo 198 del C.G.P., respetuosamente solicito:

6.2.1. DECRETAR INTERROGATORIO DE PARTE que absolverán la demandante **YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA**, sobre los hechos de la demanda, conforme al cuestionario que presentaré verbalmente en la audiencia.

6.2.2. DECRETAR INTERROGATORIO DE PARTE que absolverá el representante legal de la codemandada **ASOCIACION DE TRANSPORTADORES CONSTRUCTORES DE MORELI - ASOTRANCONSMO**, sobre los hechos de la demanda, conforme al cuestionario que presentaré verbalmente en la audiencia.

¹⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-1194 de 2008. Referencia: expediente D-7379. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil

6.3. DECLARACIÓN DE PARTE:

De conformidad con el artículo 165 del Código General del Proceso, solicitamos de manera respetuosa que se decrete el interrogatorio de parte con fines de obtener la declaración de parte del Representante Legal del **CONSORCIO DEUS 2018**, para que concurra personalmente a absolver interrogatorio de parte en relación con los hechos del proceso. Podrá ser citado o por conducto de esta apoderada judicial.

6.4. TESTIMONIALES

A efectos de que declaren sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se fundamentan las excepciones formuladas en esta contestación y sobre los hechos en los cuales se formula la demanda, ruego al señor Juez decretar la declaración y citar para el efecto a los siguientes ciudadanos en ejercicio:

6.4.1. LUIS GERARDO SOLANO TRIGOS, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien se desempeñó como Administrador de Proyecto del Consorcio DEUS, para que rinda testimonio sobre los hechos que fundamentan la contestación de demanda. El testigo podrá ser citado al correo luissolano@unicainfraestructura.com.co o por conducto de esta apoderada.

6.4.2. OSCAR ALDINEVER CANIZALES REYES, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien se desempeñó como Almacenista del Consorcio DEUS, para que rinda testimonio sobre los hechos que fundamentan la contestación de demanda. El testigo podrá ser citado al correo luissolano@unicainfraestructura.com.co o por conducto de esta apoderada.

6.4.3. EDGAR HELI PATIÑO AVILA, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien se desempeñó como Director de Obra del Consorcio DEUS, para que rinda testimonio sobre los hechos que fundamentan la contestación de demanda. El testigo podrá ser citado al correo luissolano@unicainfraestructura.com.co o por conducto de esta apoderada.

7. ANEXOS

- Acta de conformación del CONSORCIO DEUS.
- Poderes conferidos para actuar.
- La prueba documental relacionada en el acápite de Pruebas.
- Cuatro escritos separados de llamamientos en garantía.

8. NOTIFICACIONES

La suscrita apoderada recibirá notificaciones en la Secretaría de su Despacho, en la calle 100 No. 9A – 45 torre 2 oficina 501 de la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico leidyremolina@grupoethuss.com.co.

Mi poderdante en la calle 100 No. 9A – 45 torre 2 oficina 501 y en el correo electrónico leidyremolina@grupoethuss.com.co

Atentamente,



LEIDY KATHERINE REMOLINA PINTO

C.C. No. 1.100.222.045

T.P. No. 273.049 del C. S. de la J.